
**Informe Especial – El cambiante rostro de las bandas en América Latina
(ISSN 1741-7317)(=No.4)**

Primera Plana

Introducción

La violencia criminal, a lo largo y ancho de la región, está creciendo. La mayoría de los gobiernos están respondiendo a esa tendencia confrontando a las bandas criminales y tratando de reprimirlas. Existe considerable evidencia, particularmente de México, que sugiere que esa estrategia no está dando resultado. Algunos sociólogos incluso sostienen que esa estrategia de confrontación puede forzar a la región a entrar a un ciclo de creciente violencia. En Centroamérica, algunos expertos en cultura juvenil alegan que la respuesta de los gobiernos, crecientemente manejada con mano dura, al fenómeno de las maras corre el riesgo de provocar una guerra generacional.

América Latina y el Caribe es, de alguna manera, la región más violenta en el mundo. La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y la Alta Comisión sobre Derechos Humanos de la ONU, señalan que aunque América Latina y el Caribe representan solamente el 8% de la población mundial, 40% de los homicidios y 66% de los secuestros en el mundo ocurren en la región.

Este informe especial se concentrará en, y tratará de clarificar, qué clase de amenazas están afrontando los gobiernos en la región. Hace 20 o 30 años, los gobiernos autoritarios en la región fueron desafiados por grupos de guerrillas de izquierda. Solamente en Nicaragua (y posiblemente Bolivia, donde Alvaro García Linera, el vicepresidente y fuerza intelectual impulsora detrás del Presidente Evo Morales, es un terrorista convicto) los revolucionarios han ganado el poder, y lo han retenido a través de las urnas. Vale señalar

que tanto en Nicaragua como en Bolivia, el crimen organizado y la violencia criminal son mucho menos prevalentes que en los países vecinos.

En otros países, algunos de esos antiguos grupos de guerrillas aún perduran, pero los más grandes y más poderosos de ellos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambos en Colombia, y Sendero Luminoso en Perú se han convertido en organizaciones criminales que trafican con drogas ellos mismos o proveen protección armada a los traficantes de drogas.

En México, aún hay vestigios de un movimiento guerrillero conocido como Ejército Popular Revolucionario (EPR) que ha hecho atentados con bombas contra oleoductos y bancos, pero la mayor parte de la violencia proviene de las bandas que compiten por el control de las rutas del contrabando hacia EU. En Chile también aún subsiste un terrorismo político “ puro” de anarquistas y/o partidarios de los indígenas Mapuche.

De paso, vale señalar que la violencia política latinoamericana ha sido muy diferente de la violencia política de EU. El asesinato de líderes políticos en América Latina ha sido más raro de lo que ha sido en EU. Por otro lado, y a diferencia de EU, América Latina se inclina por los golpes de estado (e intentos de golpe), aunque en la actualidad esos golpes tendieron ha ser mucho menos sangrientos de lo que fueron hace una generación.

Lo fascinante acerca del cambio en América Latina es que, si bien la violencia motivada políticamente ha declinado, la violencia motivada criminalmente se ha incrementado. Los traficantes de drogas pueden ser los responsables por el incremento en las muertes en México, pero en Argentina, por ejemplo, el gangsterismo criminal proviene de las barras bravas del fútbol que, a menudo, tienen el tácito apoyo de

funcionarios locales y vínculos con grupos de extrema izquierda.

A lo largo de la región, el nivel de amenaza a los gobiernos varía de estado a estado. En México (y solamente en una levemente menor medida en Centroamérica), EU está comenzando a inquietarse acerca del aumento en la violencia empleada por las bandas criminales, transformada en insurrección. La línea entre un criminal y un revolucionario ha sido borrosa al menos desde la época de Catilina o Robin Hood. La dificultad que todos los gobiernos tienen, desde la República Romana en adelante, es hallar respuestas que sean proporcionadas a las amenazas que afrontan. De lo contrario, podrían resultar contraproducentes, como la política de *Mano Dura* de Centroamérica.

Cual es la forma que adopta una insurrección en México está lejos de ser clara. Lo que parece que las bandas desean es establecer áreas bajo su propio control y no controladas por las autoridades. Durante la reunión anual de la Oficina sobre las Drogas y el Delito de la ONU (Unodc) el 18 de octubre de 2010, su director, Yuri Fedotov, sostuvo que el flujo de dinero proveniente de las actividades ilícitas son reinvertidas en otras actividades criminales y el terrorismo, o es usado para subsidiar negocios legítimos, y de esa manera obliga a los competidores financiados con métodos más convencionales a retirarse del mercado. El amplio rango de intereses comerciales que las bandas mexicanas han desarrollado y que van más allá de actividades básicas del crimen organizado, como la prostitución y las falsificaciones, debería alarma a los estrategas de todo el mundo.

Fuentes policiales en México dicen que varias bandas han desarrollado sus propios negocios de exportación de materias primas. Algunas roban petróleo crudo, otras manejan minas ilegales. En verdad, un oficial de la policía dijo que el controlador financiero de La Familia Michoacana, la banda que opera en el estado mexicano del oeste, había organizado la exportación de 1,1m t de mineral de hierro

a China por US\$42m. El mineral de hierro aparentemente fue ilegalmente extraído de una mina en el estado de Michoacán, de un área controlada por La Familia. La Familia es una banda inusual, debido a que afirma que tiene un código moral que le impide involucrarse en la prostitución.

Las *maras* en Centroamérica también tienen un panorama coherente y promueven objetivos comerciales y políticos. De las *maras* en El Salvador y Guatemala se ha dicho que poseen un número de pequeñas compañías de transporte, mientras que en Honduras ellas tienen todo el sistema de transporte público a su merced.

En El Salvador, un sacerdote católico, Antonio Rodríguez López-Tercero, que es un experto reconocido internacionalmente en jóvenes desilusionados, actuó como vocero para las *maras* cuando ellas lanzaron una huelga de tres días el 7 de setiembre. Rodríguez López-Tercero afirmó que El Salvador estaba enfrentando una “ guerra social” debido a la carencia de oportunidades para los jóvenes.

La evidencia para un argumento de ese tipo es que la mayoría de los que matan (y son muertos) son jóvenes (de menos de 24 años), de acuerdo con un análisis de los datos de 2008. Ese análisis fue elaborado por la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (Ritla), con base en Brasil, que es parte del Sistema Económico Latinoamericano (Sela). Lo que hizo Ritla es ajustar las tasas nacionales de asesinatos para reflejar la edad de los muertos. Lo que emergió es que la tasa de asesinatos en El Salvador para personas jóvenes (de entre 15 a 24 años) resultó de 92 por cada 100.000 habitantes. La peor tasa siguiente es la de Colombia en 73 por 100.000, seguida por Venezuela en 64 y Guatemala en 55. Sorprendentemente, sigue Brasil con 52 jóvenes muertos por 100.000. Luego hay un gran descenso para Ecuador y Paraguay (26 y 22 por 100.000, respectivamente).

Curiosamente, México tiene una marca muy baja en esa medición: 10 jóvenes muertos por 100.000. Eso ubica a México a la par con Argentina (nueve); Chile y Cuba (ocho); y Uruguay (siete). Lo que debe tenerse en mente es que la lista de muertes en 2008 estaba bastante por debajo de la tasa de muertes de 2010. De acuerdo con *Reforma*, un diario de Ciudad México que mantiene un conteo independiente, 5.207 personas fueron muertas por las bandas en 2008. Hasta ahora en este año (al 8 de octubre de 2010), la cuenta llega a 9.132. Eso ubica al país rumbo a una tasa de asesinatos de alrededor de 25 por 100.000 en 2010.

La fuente estándar para las tasas de asesinatos en la región, la Oficina sobre Drogas y Delitos de la ONU (Unodc), tiene la tasa de asesinatos de El Salvador para 2008, en 51 por 100.00, basado en las estadísticas nacionales. Honduras que no aparece en las cifras de Ritla, es más alta en 61 por 100.000. Notablemente, México, en 11,6 por 100.000 para 2008, es bastante similar en las cifras de Unodc y Ritla. En 22 por 100.000 en las cifras de Unodc, Brasil parecería no tener un problema mayor, mientras que en las cifras de Ritla sí lo tiene.

Es interesante comparar las estadísticas con las percepciones acerca del delito recolectadas regularmente por Latinobarómetro, que anualmente encuesta diversas personas en América Latina acerca de sus visiones y temores. El último sondeo de Latinobarómetro halla que el temor al delito ha crecido de ser una preocupación minoritaria (citada por solamente 5% de los entrevistados en 1995) a una preocupación mayor; el delito y el temor al delito fue citado por 19% de los entrevistados en el sondeo de Latinobarómetro de 2009.

Los países donde el temor al delito es mayor son Venezuela (donde en las encuestas recientes es citado por 55% de los entrevistados) y más sorprendentemente, Panamá y Costa Rica. Según las cifras de Unodc (que son compiladas por unas ONG) la tasa de asesinatos en

Costa Rica era de ocho por 100.000 y en Panamá era de 13.

Centroamérica

Las *maras*, una creciente amenaza transnacional

Centroamérica se ha convertido en la región más hostigada por el delito en el mundo, con una tasa promedio de homicidios de 33 por cada 100.000 habitantes – tres veces más alta que el promedio mundial. Honduras, El Salvador y Guatemala, sufren las más altas tasas, promediando 58 por 100.000 entre ellos. Hay varias razones para tan altos niveles de violencia, pero una de las más visibles explicaciones es que las bandas formadas por jóvenes, o *maras*, como son conocidas en la región son las culpables.

La proliferación de bandas en la región en años recientes las ha convertido en el objeto central del temor y el prejuicio de la población, y en una considerable amenaza para la seguridad pública. La prensa de Centroamérica está llena de informes sobre la violencia de estas bandas – todos los días hay un artículo detallando el último asesinato o el ataque a un autobús, al que acompañan gráficos y macabras fotografías ilustrando la historia. Se estima que actualmente hay unas 70.000 bandas en Centroamérica, la mayoría de ella fundadas en los tres países más violentos de la región, Honduras, El Salvador y Guatemala, y en menor medida en Nicaragua. Las dos bandas más grandes y más activas son Mara Salvatrucha (también conocida como MS-13) y la M-18 (por la “ Calle 18va”).

Los gobiernos en la región afirman que la mayor parte de la violencia que aflige a sus países es causada por las bandas de jóvenes. En El Salvador, se culpa del 60% de los homicidios a esas bandas. En Honduras, el ministro de seguridad Oscar Alvarez atribuye la mayoría de los crímenes a las *maras*. De acuerdo con un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (Unodc, siglas en

inglés), sin embargo, las investigaciones muestran que solamente el 5% de todos los delitos en Honduras es cometido por personas menores de 18 años, que son los que conforman la más grande porción de miembros de las *maras*. Hay un consenso general entre los expertos que las bandas no son responsables de una proporción casi tan alta de la violencia como la que afirma el gobierno, y cree la gente común; pero ellas de todos modos contribuyen al debilitamiento de la seguridad pública, socava el control del gobierno, y han ejecutado asesinatos, extorsión y secuestros de personas inocentes.

Las bandas han existido por décadas en Centroamérica, pero su crecimiento se disparó durante los años '80 y '90. Los centroamericanos que huyeron de la región durante los conflictos civiles que afectaron a El Salvador, Guatemala y Nicaragua terminaron en Los Angeles (principalmente salvadoreños) y Miami (principalmente nicaragüenses). Los jóvenes refugiados se involucraron en la floreciente cultura de las bandas de Los Angeles, y luego establecieron su propia banda, MS-13. El traslado a Centroamérica ocurrió en el contexto de las deportaciones; en 1996 fue introducida una nueva ley en EU que permitía que cualquiera que haya sido declarado culpable de un delito en EU y no sea originario de EU sea deportado a su país de nacimiento. Eso resultó en miles de jóvenes centroamericanos, y que a menudo no hablaban castellano, retornaron a sus países de nacimiento. Hallando lo duro que era encajar en un país al que apenas conocían, mantener la cultura de la banda fue una manera de mantener un sentido de pertenencia.

Una de las teorías propuestas para explicar porqué las bandas no han logrado afirmarse en Nicaragua es que durante el conflicto de los '80, la mayoría de los refugiados nicaragüenses huyeron a Costa Rica, y aquellos que fueron a EU tendieron a establecerse en Miami más que en Los Angeles. Eso fue posible debido a la gran población cubana en Miami; ahí había una presencia latinoamericana

establecida y los cubanos también habían huido de una revolución izquierdista, como muchos de los nicaragüenses estaban haciendo del gobierno sandinista. Miami no tiene una cultura de bandas establecida como en Los Angeles, posiblemente en parte debido a que los cubanos eran generalmente de familias pudientes que habían huido de la revolución cubana, a diferencia de los inmigrantes latinoamericanos en su mayoría pobres, que poblaron Los Angeles. Por lo tanto, pocos jóvenes nicaragüenses se involucraron en el delito y las bandas, y hubo mucho menos deportaciones de nicaragüenses desde EU.

Además, algunos académicos sugieren que EU ha naturalizado a más nicaragüenses en los '80 debido a que eran opositores al gobierno sandinista en el poder en Nicaragua, y que en general prestaba más apoyo a los gobiernos de Guatemala y El Salvador y opuesto a los movimientos rebeldes en esos países, y por tanto era menos probable que naturalice a guatemaltecos o salvadoreños. Eso, por supuesto, no puede ser verificado, pero las estadísticas muestran que los nicaragüenses recibieron mucho menos órdenes de deportación: en 2005, Nicaragua recibió 6 deportados por cada 100.000 ciudadanos, mientras que El Salvador recibió 39 por 100.000. Aunque Nicaragua también tiene muchas de sus propias bandas, la banda MS-13 y la M-18 no son particularmente activas ahí, y las bandas nicaragüenses parecen ser mucho menos violentas. Eso podría deberse a que ellas no han estado expuestas particularmente a la cultura violenta de las bandas originadas en Los Angeles.

Las explicaciones para el crecimiento de las *maras* son complejas, pero abarcan la desigualdad, la exclusión social, un estado débil y a menudo corrupto, y un ineficiente aparato de seguridad como el sistema policial y judicial. Los países del triángulo norteño (Guatemala, Honduras y El Salvador) tienen un sistema de seguridad pública extremadamente débil y han sido incapaces hasta ahora de abordar el problema de las bandas. Los analistas en la región

arguyen que la ausencia de respuesta del Estado y la incapacidad de implementar políticas efectivas, son las razones clave de la proliferación de las bandas y de su creciente poder.

Emilio Goubard, un experto guatemalteco en la cultura de las bandas y presidente de la Asociación para la Prevención del Delito (Aprede), sostiene que el estado ha malinterpretado el problema considerándolo como un problema de seguridad en vez de considerar los factores sociales, como la carencia de oportunidad y la desigualdad. Los gobiernos confían en la ‘seguridad negativa’ [la represión] más que la implementación de políticas preventivas como incrementar las oportunidades de empleo, mejorando la educación y alentando la participación de los jóvenes en la política y en las comunidades.

Durante la década pasada, la respuesta uniforme de Honduras, El Salvador, y en menor medida Guatemala, ha sido experimentar con políticas de *mano dura*, aunque con poco éxito. Esas políticas involucraban el arresto de sospechosos de ser miembros de bandas (a menudo, simplemente jóvenes con tatuajes), extender los poderes de la policía para parar y cachear a jóvenes, y volver ilegal el solo hecho de ser miembro de una banda con largas sentencias para los que resultaban condenados.

Recientemente, El Salvador implementó una nueva ley de *mano dura* en respuesta a los ataques sobre buses que las bandas venían realizando con creciente frecuencia. Hasta ahora resultaron muertos este año en el país 112 empleados del transporte, como resultado de esos ataques, de acuerdo con un grupo de la industria Fecoatrans. Las bandas incluso parecían haber escalado en el nivel de violencia; el 20 de junio prendieron fuego a un autobús, con los pasajeros adentro, 14 murieron de manera instantánea y eventualmente la lista de muertos ascendió a 20.

En respuesta a ese ataque, que según se informó fue ejecutado por miembros de la banda M-18, el gobierno ha introducido una ley que vuelve ilegal ser miembro de una banda, con sentencias de hasta seis años para miembros de banda y 10 años para los líderes de las bandas. No fue una sorpresa que las bandas respondiesen. El 6 de setiembre lanzaron una oleada de amenazas contra los choferes de buses y operadores, a través de panfletos y llamadas telefónicas urgiendo que los buses no operaran o correr el riesgo que el chofer sea muerto y el bus incendiado. Entre 40% y 60% del servicio de autobuses fue paralizado el 7 de setiembre, y el día concluyó con tres ataques y tres arrestos. Las bandas aprovecharon la oportunidad para pedir negociaciones con el gobierno, lo que fue rechazado de plano.

Los ataques también se habían generalizado en Guatemala y Honduras. En diciembre de 2004, un pistolero abrió fuego sobre un bus local cerca de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, matando a 24 personas. Aunque fue dejada una nota atribuyendo el ataque a un grupo revolucionario opuesto a la pena de muerte, miembros de la banda MS-13 fueron arrestados en conexión con el ataque. Los ataques también son frecuentes en Guatemala; en 2009 fueron asesinados 146 choferes y 160 asistentes.

Sin embargo, las políticas de *mano dura* han mostrado pocos signos de éxito, y muchos activistas de derechos humanos arguyen que las leyes duras fueron mal diseñadas e implementadas. Las prisiones ya están seriamente superpobladas: en El Salvador, 175% del espacio para camas ya está llenado. Además, los miembros de bandas puestos en prisión han servido de poco para contener la violencia o debilitar a las bandas. Los reclusos parecen estar en control de las prisiones ellos mismos, y gran parte de las actividades delictivas perpetradas por miembros de las bandas que están libres son dirigidas y controladas por miembros que están en prisión. De acuerdo con la viceministra de apoyo comunitario del ministerio del

interior, Lorena Guerra, 80% de las extorsiones ejercidas por las bandas, que aparentemente afecta a 30% de la población guatemalteca, se ha informado que son dirigidas por miembros de bandas desde sus celdas en la prisión, usando teléfonos móviles introducidos de contrabando.

Los disturbios demostrando el poder de los reclusos son también algo común: en 2005, estalló un motín entre la banda M-18 y la Mara Salvatrucha en la prisión El Hoyo en Guatemala, que resultó en 30 muertos y muchos más heridos. En El Salvador, miembros de las bandas MS-13 y M-18 estaban detenidos juntos en la misma prisión, hasta que los persistentes disturbios violentos y las peleas entre bandas, forzaron a las autoridades a ponerlos presos en cárceles separadas. El 12 de setiembre se desató un motín en un centro de rehabilitación de jóvenes en El Salvador, con el resultado de un muerto y 50 heridos, el motín surgió como respuesta a un plan de las autoridades de mudar a los reclusos. El equilibrio de poder está invertido, pues los reclusos pueden decidir dónde estarán detenidos y con quiénes, y la incapacidad de los guardias para impedir el ingreso de armas y otras piezas ilegales en las prisiones, significa que ellos a menudo están a merced de reclusos violentos amotinados y son incapaces de ejercer su control.

La rehabilitación es casi inexistente, y las prisiones a menudo son vistas como ‘escuelas de capacitación’ para los miembros de bandas – a menudo aquellos que van a prisión sin estar afiliado a una banda, terminan saliendo de prisión como miembro hecho y derecho de alguna banda. Los sospechosos de ser miembros de una banda que van a prisión, también pueden alimentar un círculo vicioso; aquellos que de hecho no eran *mareros* (miembro de las *maras*) cuando van a prisión son usualmente estigmatizados y marginados y sin poder encontrar un empleo cuando salen de prisión, eso a menudo los empujan a entrar en una banda por carecer de alternativas. Los miembros de bandas que dejan la prisión también

experimentan el mismo tratamiento, volviendo casi imposible dejar una banda, incluso si esa era su intención.

Los enfoques adoptados por los gobiernos en sus intentos por frenar el problema de las bandas parece ser crucial. De acuerdo con Leslie Sequeira del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades) y Emilio Goubard, las políticas preventivas y un más efectivo sistema policial y judicial en Nicaragua podrían ser las razones clave por las que Nicaragua no sufre el mismo nivel de violencia de las bandas como en el triángulo norteño.

Nicaragua ha adoptado una estrategia de prevención de la delincuencia juvenil, incluyendo un enfoque sobre vigilancia e intervención comunitarias, y las actividades bi-mensuales anti-bandas que son conducidas por la División de Asuntos Juveniles de la Policía Nacional de Nicaragua. El hecho que las bandas no se enraizaron y extendido a una extensión tal en Nicaragua pudo haber facilitado que el gobierno tome esa ruta antes que recurrir a políticas de *mano dura*. La percibida amenaza que las bandas representan en el triángulo norteño, ha provocado que los gobiernos tomen una línea dura a fin de frenar el problema. Sin embargo, en Nicaragua parece que la menor amenaza ha significado que el gobierno no sienta la necesidad de aplicar tales draconianas políticas.

La policía nicaragüense también está menos dispuesta a culpar a las bandas del grueso de la violencia. La tendencia de atribuir la alta tasa de asesinatos a las bandas en El Salvador, Guatemala y Honduras, puede haber tenido, en realidad, el efecto de alentar de miembros a las bandas y de incrementar la violencia. Como ya fue mencionado, los jóvenes que en esos países son fuertemente estigmatizados y que se han vuelto crecientemente marginados de la vida ordinaria, a menudo es imposible que obtengan un empleo, algunas veces solamente por tener un tatuaje (los miembros de bandas usualmente están profusamente tatuados). Eso puede alimentar la membresía de

las bandas, pues los jóvenes a menudo quedan sin alternativas.

Un resultado más siniestro de culpar de la mayor parte de la violencia a las bandas de jóvenes es el fenómeno de ‘ limpieza social’ o ejecuciones extrajudiciales. Aunque a menudo se culpa de las muertes violentas de jóvenes a las peleas entre bandas o arreglo de cuentas entre ellas, muchos analistas coinciden en que la muerte de un joven también puede atribuirse a una ejecución extrajudicial llevada a cabo por agentes del estado, a menudo la policía, y grupos de vecinos que actúan como ‘ vigilantes’ . La política de ‘ limpieza social’ para librar los vecindarios de ‘ indeseables’ , usualmente jóvenes a quienes culpan de los delitos y la violencia, parece haber sido emprendida en Guatemala entre 2004 y 2007 por el entonces ministro del interior, Carlos Vielmann, y el jefe de policía de entonces, Erwin Sperisen.

Esa clase de políticas no solo incrementan las cifras de asesinatos, sino también tiene el efecto de debilitar la confianza del público en la policía, lo que a su vez reduce la capacidad del estado de frenar a las bandas, alimentando más violencia. La tendencia de Nicaragua de no culpar a los jóvenes por toda la violencia en el país, significa que la población no estigmatiza a los jóvenes en el mismo grado, quizá resulte en que menos jóvenes se unan a las bandas.

Sin embargo, incluso Nicaragua puede no ser capaz de controlar uno de los factores más significativos que afectan los niveles del delito en Centroamérica: el tráfico de drogas. El impacto en Centroamérica ha sido devastador, principalmente debido a su desafortunada posición entre la provisión de drogas en América del Sur y la demanda de droga en EU. De acuerdo con estimaciones de EU, aproximadamente 88% de la cocaína destinada a Estados Unidos pasa a través de Centroamérica y/o México. El impacto sobre México es bien conocido y ha tenido extensa cobertura en la prensa durante los pocos años pasados, desde que el Presidente Felipe Calderón comenzó su

‘ guerra a las drogas’ en diciembre de 2006, exacerbando una viciosa guerra entre el estado y las bandas de drogas, y entre las bandas de drogas entre sí.

Está claro que las principales bandas de drogas, como el cártel de Sinaloa, Los Zetas, y el cártel del Golfo, se han infiltrado en Centroamérica, y varias células están operando en la región. Tres sospechosos de ser miembros del cártel del Golfo fueron arrestados en Nicaragua en agosto, quienes dijeron que recibían sus órdenes de tres hombres con base en Guatemala, quienes a su vez eran supervisados por un hondureño. Los Zetas retienen considerable poder en el norte y noroeste de Guatemala, donde ellos controlan las rutas de tráfico a México. Otras rutas, a lo largo de la costa del Pacífico de Guatemala, son controladas por el cártel de Sinaloa. Hace tiempo que las bandas tienen distribuidores locales de drogas, pero el grado en el cual ellos están vinculados directamente con las bandas mexicanas de drogas y están involucrados en el tráfico es, sin embargo, menos claro, y más difícil de cuantificar.

Un informe de 2007 del Woodrow Wilson Center, un think-tank de EU, y la Universidad de San Diego sugiere que en Guatemala, hay poca evidencia que las *maras* están conectadas con los cárteles de la droga. Aunque los cárteles tienen considerable poder en el país, ellos están más generalmente vinculados con los grupos del crimen organizado y con aquellos que son conocidos como los ‘ poderes ocultos’ – oficiales militares activos o retirados, funcionarios del gobierno, personal de seguridad privada y a menudo policías y funcionarios judiciales corruptos.

Al parecer, en Honduras hay serias evidencias de la participación de las bandas con los cárteles. Una masacre, el 8 de setiembre de 2010, en una fábrica de calzados en San Pedro Sula terminó con la vida de al menos 18 personas. El jefe de policía de la ciudad ha dicho que fue el resultado de un arreglo de cuentas entre la banda MS-13 y la M-18,

que están protagonizando una guerra territorial por el control de la ruta del contrabando. Los mareros en Honduras son, según informes, contratados por los cárteles para operar como asesinos.

Sin embargo, el vínculo que al parecer es el más fuerte es en Honduras, donde los lazos entre *maras* y cárteles se construyeron fueron construidos en torno al uso de los primeros como traficantes minoristas. De acuerdo con el informe mencionado más arriba, los líderes de bandas en El Salvador tienen la capacidad de pasar de operaciones locales a convertirse en traficantes internacionales de drogas. Existe creciente evidencia de lazos entre MS-13 y los cárteles, como el arresto en setiembre de 2009 del líder de una célula de MS-13 transportando siete kilos de cocaína, considerablemente más de lo que los *mareros* cargan habitualmente. De acuerdo con inteligencia de la policía, basada en fuentes *mara*, él se había convertido en un ‘narco’, dirigiendo operaciones y controlando la ruta desde el Pacífico hasta la frontera con Guatemala. También hay evidencia de miembros de MS-13 que están siendo entrenados por Los Zetas y que se reúnen con miembros del cártel del Golfo, y que están intentando ganar el control del grueso de la distribución en áreas de El Salvador.

Sin embargo, las *maras* aún están lejos de convertir en socios plenos de los cárteles o en sofisticadas organizaciones de tráfico de drogas por sí mismas. Extorsión, secuestro, distribución local de drogas y en ocasiones tráfico de personas, aún permanecen como sus principales actividades. Es imposible decir con certeza si eso cambiará o no, pero algunas pistas que la M-13, al menos en El Salvador, está intentando avanzar en la dirección del tráfico de drogas, significa que no se puede excluir a las *maras* como potenciales actores clave en las redes transnacionales del tráfico de drogas.

- **Tasa de homicidio**
(Por cada 100.000 habitantes, 2009)

El Salvador: 61

Guatemala: 45

Belice: 31

Panamá: 24

Costa Rica: 11

Nicaragua: 11

- **Causas de la violencia**

A menudo la pobreza es asumida como una causa de la violencia, y

El Salvador, Honduras, y Guatemala, ciertamente son países pobres.

Sin embargo las personas pobres no son inherentemente violentas.

Las regiones más pobres en Guatemala no son las regiones con los

más altos niveles de violencia. Nicaragua es más pobre que los

países del triángulo norteño, pero tiene niveles mucho más bajos de

violencia y de ser miembros de bandas. Una causa más probable de

la violencia y del ingreso como miembros de bandas es la

desigualdad.

- **Estimación de miembros de bandas**

(Por cada 100.000 habitantes)

Honduras: 500

El Salvador: 152

Guatemala: 111

Nicaragua: 81

Costa Rica: 62

Panamá: 43

Belice: 36

- **Factores**

La desintegración familiar y la violencia doméstica son importantes

factores que contribuyen para el ingreso a las bandas. A menudo, los

jóvenes se unen a una banda para hallar un sentido de pertenencia y

un sustituto de la familia; las bandas ofrecen protección; refugio;

alimento; amistad; y una fuente de ingresos cuando las oportunidades

de empleo son escasas.

Colombia

Entendiendo a los grupos sucesores

En el 2006 el principal grupo paramilitar, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tomó parte en un monumental y ampliamente publicitado proceso de desmovilización. Sin embargo, gran parte de los delitos asociados previamente con las actividades de ese grupo, no han declinado en línea con la desmovilización de las AUC. En algunos lugares, en realidad, la violencia se ha incrementado. Entre 2006 y mediados de 2009, las cifras oficiales de Colombia ubicaban el total de miembros de las llamadas Bacrim (bandas criminales surgidas recientemente) en un estable número de 4.000; sin embargo, en el mismo periodo las fuerzas de seguridad informaron del arresto de 6.403 miembros de las Bacrim y la muerte de 1.184. Estimaciones independientes calculan que esos grupos actualmente cuentan con alrededor de 10.000 miembros.

Esas cifras ilustran la complejidad del tema. Hay poca coincidencia sobre quiénes son los nuevos (o viejos) actores; cuánta gente forma parte de las Bacrim; cuántas Bacrim existen; y dónde operan. La necesidad de claras definiciones no es una pedante fijación académica, sino una necesidad que tiene implicaciones directas sobre cómo se deberá abordar el problema.

De acuerdo con el informe 2010 de Amnistía Internacional (AI)

‘*Herederos de los paramilitares: el nuevo rostro de la violencia en Colombia*’ : “ Algunas fuentes han explicado que la negativa del gobierno colombiano a etiquetar a esos grupos como paramilitares está diseñado para prevenir que realicen futuros reclamos relacionados con el status de grupos ilegales armados en futuras negociaciones.” Sin embargo, como señala AI, esa explicación no aclara por completo la negativa del gobierno del uso de la calificación de ‘ paramilitar’ , puesto que el gobierno ha negociado con otros grupos criminales en el pasado, notablemente, el Cártel de Medellín. Se podría afirmar que la explicación más adecuada para este estado de negación es el hecho que una porción significativa de los miembros de esos grupos son (aparentemente) comandantes de rango medio de la AUC que fueron desmovilizados; si el gobierno reconoce a las Bacrim como grupos neo-paramilitares, debería

admitir efectivamente su responsabilidad parcial, puesto que el problema se origina en parte en las deficiencias del esfuerzo para la desmovilización paramilitar.

Deficiencias en la desmovilización de las AUC

Los dos problemas principales en el esfuerzo de desmovilización de las AUC fueron: a) el gobierno del Presidente Alvaro Uribe (2002-2010) no logró establecer directrices claras para la identificación y verificación de los individuos desmovilizados y; b) el gobierno no aprovechó la oportunidad para establecer un registro de los activos y de las redes delictivas de los combatientes desmovilizados.

El primero de los problemas permitió que algunos comandantes de rango medio de las AUC eviten la desmovilización, permitiendo que secciones de ese grupo sigan activas, mientras la facción paramilitar ya no existía más, al menos oficialmente. El fracaso en establecer la identidad de los miembros paramilitares antes de la desmovilización, también abrió la puerta al fraude, con varios casos registrados de civiles que reemplazaban a paramilitares reales en las ceremonias de desmovilización, por los incentivos económicos y sociales ofrecidos por el gobierno a individuos que abandonaban las armas.

La segunda deficiencia se alimenta de la primera; la ausencia de un registro de activos significa que los líderes paramilitares que sí se desmovilizaron pudiesen ocultar sus activos al transferir su control a aquellos comandantes de rango medio que no habían participado en el proceso. La disponibilidad de redes delictivas preestablecidas y el control de importantes activos condujeron a que esos paramilitares ‘impostores’ pudiesen fácilmente reclutar nuevos miembros y operar bajo una nueva fachada.

Sin embargo, el gobierno no acepta el argumento que las Bacrim son de hecho el resultado de la metamorfosis de algunos grupos paramilitares. Y sostiene que la pequeña proporción de paramilitares desmovilizados y recapturados por nuevos delitos, prueba que el nivel de reincidencias es bastante pequeño. De acuerdo con la oficina de investigación criminal de la policía nacional, de los 7.190 miembros de las Bacrim capturados hasta noviembre de 2009, solamente 71

habían participado en el proceso de desmovilización. Eso significa que aproximadamente 16% de todos los miembros de las Bacrim arrestados o muertos hasta la fecha eran reincidentes. Sin embargo, las cifras no toman en cuenta (y es imposible de determinar) cuántos de los capturados o muertos eran paramilitares que simplemente no lograron desmovilizarse.

AUC vs. Bacrim

Sin embargo, hay una clara diferencia entre las AUC y las Bacrim. Mientras las AUC enfatizaban claramente un elemento anti-subversivo o anti-guerrillas en su existencia, incluso aunque eso se utilizaba en gran medida como medio para justificar su creciente participación en las actividades del narcotráfico, las Bacrim raramente han adoptado esa retórica anti-subversiva, y en muchos casos han estado dispuestos a concretar pactos con otros grupos criminales y/o grupos guerrilleros para compartir los corredores del narcotráfico.

De acuerdo con el documento de 2010 de la Fundación Ideas para la Paz, ‘*¿Para dónde va el paramilitarismo en Colombia?*’ , entre 2002 y 2006, los grupos paramilitares concentraron sus actividades ilegales en: combates (42%); incursiones armadas (27%) y; masacres (8%). Entre 2006 y 2008, en cambio, las Bacrim se concentraron en amenazas (53%); combates (23%) y: incursiones armadas (8%). Este giro mostraba claramente que las actividades de las Bacrim, aunque aún retenían ciertas características paramilitares, pueden describirse mejor como una fusión de las actividades desarrolladas por paramilitares, narcotraficantes y grupos del crimen organizado.

A diferencia de las AUC que tenían una jerarquía y una organización nacional, las Bacrim generalmente operan independientemente de uno y otro, y no tienen un líder nacional identificable y tampoco comparten una estrategia u objetivo común. Mientras que las AUC tenían el control de grandes áreas rurales, las Bacrim han concentrado sus actividades en áreas rurales y en los alrededores de caminos y enlaces de comunicación que unen varias ciudades. Como los más prominentes líderes paramilitares fueron removidos del conflicto (pues fueron desmovilizados, extraditados o muertos), las

actividades ilegales de sus grupos fueron dejadas crecientemente en las manos de verdaderos narcotraficantes como ‘ Cuchillo’ (Pedro Oliveiro Guerrero) y Daniel Barrera Barrera, también conocido como ‘ El Loco’ .

Eso significa que el número total de Bacrim parece estar en constante estado de cambio, pues los diferentes grupos se fusionan o dividen en la medida que sus líderes locales son capturados por las fuerzas de seguridad o eliminados en las guerras entre bandas por el territorio. La fluidez de algunos grupos, combinado con su naturaleza clandestina significa que las estimaciones sobre el número de organizaciones en existencia y el total de miembros de cada una cambia con frecuencia; esas variaciones dependen del observador, el periodo de tiempo y la región bajo observación (*ver tabla siguiente*).

Año	Número de Bacrim	Observador
2006	30-60	<i>El Tiempo</i>
2007	32	Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
2008	11-17	Policía Nacional
2009	100	<i>El Espectador</i>

Fuente: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac)

‘ *Guerra y violencia en Colombia: herramientas e interpretaciones*’ .

Donbernabilidad – el caso de Medellín

En Democracias Violentas en América Latina (las Culturas y Práctica de la Violencia) los autores arguyen que el incremento del crimen violento en América Latina en el actual periodo democrático es el resultado de la atomización del control sobre los diversos actores. De ese modo, al ser removida la línea jerárquica de control de la violencia, ejercida previamente por el estado a través de dictaduras militares, numerosos actores luchan por el control de las diferentes redes criminales y las zonas de influencia, lo que conduce a un incremento de la violencia. Numerosos observadores del conflicto colombiano arguyen que eso es exactamente lo que ha ocurrido en Medellín, capital del departamento de Antioquia, donde luego de la remoción exitosa por el estado de las milicias de guerrilla urbana de la ciudad, el Bloque [paramilitar] Cacique Nutibara, liderado por

‘Don Berna’ (Diego Murillo Bejarano) tomó el control de las actividades delictivas.

Eso significó que entre 2002 y 2007, cuando ‘Don Berna’ controlaba las actividades delictivas en la ciudad, la criminalidad, especialmente las tasas de homicidio, decrecieron. Ese periodo, conocido como el periodo de *Donbernabilidad* – juego de palabras enlazando a Don Berna con la gobernabilidad – registró un descenso de 61,6% en los homicidios. Sin embargo, el 24 de agosto de 2007, cuando ‘Don Berna’ y sus camaradas líderes paramilitares desmovilizados fueron detenidos y transferidos a la prisión de máxima seguridad de Cómbita, el estado comenzó efectivamente el proceso por el cual numerosos grupos criminales en la ciudad quedaron enzarzados en una guerra entre bandas para desafiar al dominante rol jugado por la Oficina de Envigado, controlada previamente por ‘Don Berna’. En consecuencia, a fines de 2007, la tasa de homicidios de Medellín inició una tendencia a elevarse que no ha terminado hasta ahora.

De acuerdo con el informe especial de 2009 del Observatorio del Conflicto Armado, ‘*¿El Declive de la Seguridad Democrática?*’, el fin de la *Donbernabilidad* había tenido un impacto directo sobre el número de combatientes desmovilizados muertos en la ciudad: de 14 homicidios en 2004, fueron 73 en 2008 y 90 en los primeros nueve meses de 2009. El problema en Medellín no fue el encarcelamiento de ‘Don Berna’ sino la carencia de claras políticas post-conflicto que podrían efectivamente abordar la emergencia de bandas competidoras. En cambio, las políticas fueron desarrolladas al volverse obvio que el problema estaba empeorando, haciendo que esas estrategias fuesen insuficientes para hacer frente de manera definitiva al problema.

Clasificación de los grupos violentos en Colombia

1) Por origen

Disidentes: son aquellos grupos que pertenecían a las AUC y no se desmovilizaron debido a que no tomaron parte en el proceso de desmovilización o porque sus específicos bloques de las AUC

solamente se desmovilizaron parcialmente (a saber, Bloque de Contrainsurgencia Wayú; Bloque Héroes Montes de María).

Rearmados: grupos formados por paramilitares desmovilizados que se rearmaron y formaron nuevas organizaciones criminales después de concluir el proceso de desmovilización (Frente Cacique Arhuaco en Magdalena).

Emergentes: grupos especializados en el crimen organizado o el control de las actividades de narcotráfico circunscriptos a un área/s particular de influencia; existían al lado de las AUC, pero ganaron notoriedad solamente después de ser desmovilizado el último (como la Oficina de Envigado).

2) Por configuración estructural

Jerárquica: tiene una cadena de comando lineal, que convierte su estructura de mediana complejidad con un líder visible, también son identificados por la uniformidad de sus miembros que pueden vestir uniformes u otras insignias reconocibles.

Híbrida: la cadena de comando no es lineal sino que está formada por la amalgama de grupos semi-autónomos que responden a un comando central. Tienen varios líderes visibles y están dispersados en el territorio nacional, de esa manera los grupos actúan independientemente del resto, pero con un objetivo común.

De Red: la estructura de estos grupos es de alta complejidad, aunque no existe una cadena de mando lineal. Cada célula actúa independientemente pero se relacionan unos con otros usando un nombre común y siendo motivados por fines similares.

3) Por objetivo

Captura del estado: capturar el estado o la necesaria influencia sobre los partidos políticos a fin de ejercer suficiente influencia sobre el estado para evitar que el estado combata con efectividad sus actividades ilegales (a saber, las Aguilas Negras).

Contrainsurgencia: para desafiar el poder de los grupos insurgentes, tanto en términos de influencia política sobre la población como el control de territorios bajo la influencia de grupos de guerrillas de izquierda (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [Farc] y el

Ejército de Liberación Nacional [ELN]).

Fuente: Ibid.

- **El problema de la policía**

Debido a que el gobierno colombiano define a las Bacrim como bandas de delincuentes comunes, solamente la policía nacional, no los militares, puede hacerles frente. Por un lado, eso evita el contacto entre miembros de las fuerzas militares (algunas de ellas cooperaron con los militares en el pasado) y las Bacrim; pero por otro lado, impide la detección y procesamiento de soldados corruptos que pueden cerrar los ojos ante el problema en áreas rurales, como se ha registrado regularmente en los informes de AI.

- **Principales grupos conocidos**

‘Los de Urabá’ o ‘Los Urabeños’ opera en nueve departamentos y 79 municipalidades, se estima que tiene 1.200 miembros; ‘Los Rastrojos’ opera en 10 departamentos y 50 municipalidades, con unos 1.400 miembros; ‘Los Paisas’ opera en siete departamentos y 45 municipalidades con 415 miembros; ‘Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia’ (Erpac) opera en cinco departamentos y cuenta con 800 miembros; ‘Renacer’ opera en 11 municipalidades en el departamento de Chocó, con 100 miembros; ‘Nueva Generación’, que opera en tres municipalidades en el departamento de Nariño y tiene unos 120 miembros; ‘Los del Magdalena Medio’ opera en ocho municipalidades de cuatro departamentos con unos 80 miembros; y ‘Los Machos’, que opera en dos municipalidades en el departamento de Valle del Cauca, con unos 50 miembros.

- **Las Aguilas Negras**

En varias partes del país, algunas personas que han cometido crímenes, intimidado a activistas de derechos humanos y forzado a los residentes locales a abandonar sus tierras se han identificado a sí mismos como miembros de las Aguilas Negras, sin embargo, no hay evidencia de que éste sea un grupo nacional firmemente unificado. En cambio, parece que varios grupos sucesores en diferentes

lugares, y en diferentes ocasiones, usaron ese nombre y han emitido declaraciones en nombre de esa organización, que podría tener algún nivel de organización nacional entre diferentes grupos satélites con un objetivo común, pero sin contar con una estructura cohesiva como acostumbraba tener las AUC.

México

El cártel Sinaloa permanece como la banda dominante

Lo que está pasando en la mortífera guerra entre bandas mexicanas está distorsionada por el prisma de las habladurías y los rumores. Sin embargo, tres grandes hechos parecen claros. El primero es que la banda (o cártel) Sinaloa permanece como la banda dominante. El segundo es que Los Zetas, que alguna vez fueron subcontratistas que operaban para la banda del Golfo, ahora son el grupo dominante en el lado este del país. El tercero es que las otras bandas (La Familia, en Michoacán; Arellano Félix, en Tijuana; la propia banda del Golfo; la banda Juárez, en Ciudad Juárez; e incluso la banda Beltrán Leyva) han perdido terreno en los 18 meses pasados.

El duradero predominio de la banda Sinaloa y sus dos fundadores, Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en la industria del crimen organizado en México, es extraordinario. Lo que preocupa a los estrategas es que el crimen organizado se ha convertido en una industria en México. La banda Sinaloa, de acuerdo con los académicos, tiene unas 150.000 personas en su nómina de sueldos.

Los sociólogos lamentan el hecho que la gente pobre con poca oportunidad de educación, son absorbidas por las bandas. Pero aún más preocupante es lo señalado por el alcalde de Ciudad México, Marcelo Ebrard, en el sentido que la riqueza de las bandas es un atractivo para mexicanos graduados, educados y ambiciosos, que desean hacer dinero rápidamente. Es esa corrupción y la carencia de una conciencia de servicio público, alega Ebrard, es lo que hace que las tribulaciones de México sean tan agudas.

La banda Sinaloa y sus dos fundadores combinan violencia,

inteligencia y atractivo. Ellos parecen contentos en realizar alianzas tácticas con sangrientos rivales para neutralizar una amenaza común. Hay persistentes rumores que el éxito de la banda Sinaloa provienen de su hábil manejo de las operaciones del gobierno para aplicar la ley.

Parece una coincidencia muy conveniente que tantos golpes del gobierno contra los gangsters hayan eliminado algunas claras amenazas a la banda Sinaloa, más recientemente, la banda Beltrán Leyva. Esa ofensiva comenzó con la muerte por los marines de Arturo Beltrán Leyva el 19 de diciembre de 2009 y culminó a fines de agosto de 2010, con el arresto de Edgar Valdés Villarreal (alias ‘ La Barbie’) en Lerma, en el Estado de México. ‘ La Barbie’ era uno de los gangsters más buscados del país. Las autoridades creen que él estaba en gran medida detrás de la escalada en la violencia en Cuernavaca, la capital de Morelos. El era uno de los lugartenientes de Arturo Beltrán Leyva. Los hermanos Beltrán Leyva conducían una facción de la banda Sinaloa que parecía estar tratando de extender el comercio de drogas en Ciudad México.

Los cinco hermanos Beltrán Leyva, de los cuales Arturo era el mayor, habían estado fuertemente involucrados en la corrupción de importantes funcionarios en la policía federal, el más notable fue Noé Ramírez Mandujano, que era en ese entonces el zar de la droga.

Como la policía también arrestó a Carlos Beltrán Leyva el 3 de enero de 2009, Mario Alberto y, lo más importante, Héctor, heredaron la banda.

La facción Beltrán Leyva de la banda Sinaloa habían estado luchando contra la facción de Guzmán de la banda Sinaloa desde que supuestamente Guzmán traicionó al hermano de Arturo, Alfredo, ante la policía en enero de 2008. Como parte de esta lucha, la facción Beltrán Leyva, supuestamente entró en una alianza táctica con Los Zetas, los asesinos usados por la banda del Golfo que controlaba la ruta del Caribe para ingresar drogas en EU. La alianza Beltrán Leyva-Los Zetas, mató a uno de los hijos de Guzmán en el año 2009. La banda Sinaloa estaba basada en el estado del mismo nombre

sobre el Pacífico, y controlaba la ruta del Pacífico para el contrabando de cocaína en EU desde Colombia. En el par de años pasados, la facción Beltrán Leyva hizo esfuerzos para desarrollar un mercado para la cocaína en Ciudad México.

Algo interesante es que la banda Sinaloa fue la única gran banda mexicana que ha tratado de exhibir un rostro ante los medios mexicanos. En abril de 2010, Ismael ‘ El Mayo’ Zambada, dio una fascinante entrevista a la principal revista de noticias de México, *Proceso*. En esa entrevista, Zambada declaró que el gobierno había perdido la guerra contra las bandas, y señaló que incluso aunque él fuese muerto, la guerra y las muertes violentas no pararían. La entrevista, sin precedentes, donde Zambada hizo esos comentarios, la realizó uno de los más distinguidos periodistas de México, Julio Scherer García, de 84 años, el fundador de la revista *Proceso*, y fue publicada en la revista el 4 de abril.

Scherer justificó la moralidad de tratar a Zambada pensando que era un político o un empresario, con el argumento que él estaba listo para ir al infierno si el diablo le ofrecía una entrevista. Scherer, que se hizo de una reputación en los ’ 80 y ’ 90 rehusando aceptar las versiones de sucesivos gobiernos de los escándalos que los acosaban, más recientemente ha desarrollado buenas relaciones con líderes de bandas y sus acólitos. El entrevistó (y fue efectivamente co-autor) de libros sobre Zulema Hernández, que es la esposa de Joaquín ‘ El Chapo’ Guzmán, y Sandra Avila, la llamada Reina del Pacífico, una importante contrabandista de drogas.

Lo que Zambada dijo a Scherer fue sorprendente. Declaró, rotundamente, que el gobierno de Calderón había perdido su autodeclarada guerra contra las bandas de tráfico de drogas.

Zambada alegó que las bandas ahora han impregnado la sociedad y estaban “ arraigadas” como la corrupción. Zambada dijo que la “ cuestión” de las drogas involucra a millones de personas, advirtiendo que cualquier jefe de los gangsters podía ser reemplazado “ en un abrir y cerrar de ojos” . El propio Zambada tiene sobre su cabeza una recompensa de US\$2,3m.

Zambada reforzó su punto de vista diciendo que a veces él fantasea acerca de lo que podría pasar si él se entregase a las autoridades.

“ Mi caso podría ser un ejemplo, una saludable lección para todos. Ellos me disparan y surge la euforia. Pero luego de unas pocos días nos damos cuenta que nada ha cambiado [...] sean cuantos sean los jefes de bandas que sean arrestados, muertos o extraditados, todos ellos serán reemplazados, así, sin más.”

Zambada, ahora con 60 años, fundó la banda Sinaloa con su compadre Guzmán. Zambada afirma haber estado en el comercio de drogas por 40 años, y dijo que él aún habla “frecuentemente” por teléfono con Guzmán. El agregó que la revista *Forbes*, de EU, fue tonta en incluir a Guzmán en su lista de multimillonarios globales.

Zambada admitió que un jefe de banda no era un hombre feliz: dijo que estaba atemorizado la mayor parte del tiempo, y admitió que el ejército casi lo había atrapado en al menos cuatro ocasiones. El dejó implícito a Scherer que estaba basado en un área montañosa, aunque aparentemente se reunió con Scherer en algún lugar cercano a Ciudad México. Zambada está bastante seguro que si las autoridades lo atraparan, lo matarían. Zambada dijo que él había “llorado” por su hijo, Vicente Zambada Niebla, que fue arrestado en 2009 y extraditado a EU a principios de este año.

Pactos y treguas

Lo sorprendente es que, de acuerdo con un informante (ahora muerto), incluso Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Arturo Beltrán Leyva (‘El Barbas’) acordaron una tregua a principios de 2009. Esa tregua sólo terminó cuando Arturo fue muerto el 16 de diciembre de 2009. El informante afirmó que altos administradores de toda la organización Beltrán Leyva fueron convocados a una reunión en un restaurante frente a una playa en Acapulco, para celebrar la tregua con ‘El Chapo’. Arturo presidió la reunión: entre los asistentes estaba Jesús Basilio Araujo, conocido como ‘El Pollo’, que era el jefe de los sicarios para los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con información de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), de la

Procuraduría (federal) General de la República, ‘ El Chapo’ también ha entrado en alianzas tácticas con la Familia Michoacana para ayudar a esa organización a fortalecerse contra Los Zetas. Un brigadier del ejército, Augusto Moisés García Ochoa, ha registrado en su libro La participación de las Fuerzas Armadas en el entorno actual de la seguridad pública, que ‘ El Chapo’ acordó una tregua con la banda del Golfo en 2006. En ese entonces, la banda del Golfo estaba bajo el mando de Jorge Eduardo Costilla (‘ El Coss’) y controlaba a Los Zetas que fueron (y son) conducidos por Heriberto Lazcano. Ahora Los Zetas y la banda del Golfo están enfrentados en una sangrienta guerra en Tamaulipas, Nuevo León y quizá Chihuahua por el control de las rutas del contrabando de drogas a los EU.

Los Zetas

Este grupo de ex personal de las fuerzas especiales mexicanas, es probablemente la banda más peligrosa en México. Sus operativos, supuestamente, fueron responsables del asesinato a sangre fría de 72 inmigrantes ilegales en Tamaulipas, a fines de agosto.

Los Zetas también han comenzado a intimidar a la prensa. En julio, ellos tomaron a cuatro periodistas que habían informado que las autoridades de la prisión en Durango permitían salir a algunos reclusos para asesinar a blancos marcados. Según se supo, la información provino de la banda Sinaloa, que deseaban debilitar los lazos de Los Zetas con la policía del estado. Los Zetas secuestraron a los periodistas que publicaron la historia y les advirtió sobre su conducta futura.

El gobierno, a través del ministro de seguridad pública, Genaro García Luna, y el director de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, afirmó que una exitosa operación policial había puesto en libertad a los periodistas: de hecho, los gangsters los dejaron en libertad porque ellos eran más útiles vivos que muertos. Desde entonces, Los Zetas han intimidado a otros diarios y a estaciones de radio.

El costo para la banda Sinaloa

La gran pérdida para la banda Sinaloa se produjo el 29 de julio del año pasado, cuando el ejército mató a Ignacio ‘ Nacho’ Coronel Villarreal. El gobierno pudo haberse incautado de la computadora de Coronel y pudo quebrar sus códigos de seguridad, pues el 4 de agosto la armada anunció que había incautado 200 toneladas de precursores químicos en Manzanillo. El negocio de Coronel era la producción de meta-anfetaminas con químicos importados de Asia y embarcando las drogas ilegales con destino a EU. La incautación en Manzanillo estableció un nuevo record.

El gobierno afirma que ‘ Nacho’ , que fue muerto en Zapopan, un próspero barrio residencial en las afueras de Guadalajara, era el comandante operacional de la banda Sinaloa, la más grande organización de tráfico de drogas del país. Su muerte sugiere que el gobierno está volviendo a la estrategia de “ decapitación” de las bandas aplicada por el gobierno del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), que apuntaba al arresto de gangsters clave en vez de confrontar y hacer retroceder a las bandas de áreas del país que controlaban.

La banda Sinaloa tradicionalmente ha controlado el estado Jalisco, pero ese control parece escabullirse. Las muertes por las bandas se elevaron a más del doble en el estado, en los 12 meses pasados: hasta ahora en este año (8 de octubre), han sido asesinadas 376 personas en el estado; en el año calendario de 2009 un total de 212 fueron muertas por los gangsters. En 2006, antes que el Presidente Calderón lanzase su guerra contra el crimen organizado, sólo 45 personas fueron asesinadas en Jalisco por los gangsters.

El gobierno desplegó dos helicópteros y 150 soldados, en un esfuerzo para arrestar a ‘ Nacho’ . El, aparentemente prefirió seguir luchando y disparó matando a uno de sus atacantes antes de ser muerto por los disparos. ‘ Nacho’ , de 56 años, se supone que era el lugarteniente clave de Joaquín ‘ El Chapo’ Guzmán, que escapó de una prisión federal en Jalisco en 2001.

Los cínicos señalan que ‘ Nacho’ fue personaje de una nota de portada en la revista semanal Proceso, dos semanas antes de su

muerte. Hasta entonces, él había sido virtualmente desconocido. Los cínicos afirman que otra facción de la banda Sinaloa, envidiosa de su rol, había filtrado información a Proceso y luego a las autoridades.

Esos mismos cínicos alegan que los gangsters ahora están manipulando a las fuerzas armadas, usándolas para arreglar cuentas entre las bandas.

Caribe

Jamaica: La política de ‘guarnición’ al desnudo

Los arraigados lazos entre las bandas y los partidos políticos quedaron al desnudo este año, en el escándalo que rodeó el requerimiento de extradición hecho desde EU del supuesto traficante de drogas y líder de la tristemente célebre banda “ Shower Posse” , Christopher ‘ Dudus’ Coke, acusado de tráfico de narcóticos y armas. Algunos expertos en seguridad sugieren que el caso, que casi forzó la renuncia del Primer Ministro Bruce Golding, podría marcar un punto de inflexión en el avance de Jamaica hacia la solución del notorio problema de las bandas.

Jamaica tiene una de las más altas tasas de homicidio en el mundo: con 59 por cada 100.000 habitantes en 2008, está a la par con El Salvador y Honduras. Cerca de dos tercios de los 1.680 asesinatos cometidos en Jamaica en 2009, fueron atribuidos por el gobierno a la violencia de las bandas.

Las bandas criminales en Jamaica se remontan a los años ’ 60, cuando los principales partidos políticos rivales, el gobernante Jamaica Labour Party (JLP) y el opositor People’ s National Party (PNP) obtuvieron la ayuda de líderes de bandas o ‘ dones’ para conseguir votos en tiempo de elección en las llamadas “ comunidades de guarniciones” a cambio de contratos del gobierno y protección ante la ley. Los ‘ dones’ ejercieron su influencia no solamente a través de la coerción e infundiendo temor, sino también proveyendo dádivas y servicios a las empobrecidas comunidades ante la ausencia del estado.

Aunque el clientelismo político todavía existe, se asume

generalmente que la mayor parte de la violencia relacionada con las bandas en Jamaica actualmente no es primariamente política. Ese contrasta con las elecciones de 1980, cuando 800 personas fueron muertas en choques entre bandas. Los expertos en seguridad dicen que la escalada de la violencia es ahora un resultado de la mayor participación de las bandas en el tráfico de drogas y armas – un fenómeno característico de la región en general.

Esa asunción, que la política de guarnición estaba muerta, fue cuestionada cuando Golding rehusó inicialmente cumplir con el requerimiento de extradición de EU emitido en agosto de 2009 por Dudus Coke, un supuesto cabecilla de la droga, que según se dice controla Tivoli Gardens, el núcleo de la banca parlamentaria de Kingston Western, ocupada por Golding desde 2005. Después que en mayo de 2010, se reveló que Golding había aprobado la contratación de una firma de abogados de EU para hacer lobby contra el requerimiento de extradición hecho por Washington, el gobierno fue forzado a cumplir con el requerimiento de extradición de EU.

Este completo giro desató la violencia más extrema que el país haya visto en años recientes, cuando la policía y los soldados buscaron ejecutar la orden de arresto que pesaba sobre Coke, chocando con sus seguidores, lo que provocó 76 muertes, incluidos dos policías y un soldado.

La subsiguiente captura de Coke y su traslado a EU ha aliviado la situación para Golding, que desde entonces declaró una ofensiva en todo el país contra todas las “ bandas” (se piensa que hay un total de 286 a lo largo del país) respaldado con seis leyes ‘ anti-crimen’ aprobadas el 23 de junio, que endurecen las provisiones sobre libertad bajo fianza, libertad bajo palabra, armas de fuego y poderes de arresto y detención. Sin embargo, los escépticos se preguntan hasta donde es posible romper los vínculos que permanecen entre los partidos políticos y las bandas armadas, dado que un número de políticos jamaiquinos – incluida la líder opositora Portia Simpson-Miller (que representa el distrito ‘ guarnición’ de St Andrew South West) – tiene lazos con esas comunidades ‘ guarnición’ ,

estimadas en 18.

Región: Un extendido flagelo

La creciente participación de las bandas en el crimen organizado y la escalada de violencia resultante no están confinadas solamente a Jamaica, sino que es un fenómeno regional.

Junto con Jamaica, los expertos en seguridad destacan la proliferación de las bandas en Guyana y en Trinidad y Tobago, donde la cultura de las armas es la más visible. Mientras que en 2004 se estimaba que en Trinidad y Tobago operaban 40 bandas criminales, ese número se ha elevado desde entonces a 86 de acuerdo con estimaciones del gobierno. El número de asesinatos relacionados con las bandas consecuentemente se elevó de 30 en 2002 a 296 en 2008, sumando 54% del total anual.

Así como el crecimiento de la actividad de las bandas en Centroamérica ha estado vinculado con el tráfico de drogas y los cambios en las rutas de tránsito, lo mismo se aplica al Caribe, que está ubicado en una gran encrucijada entre una ruta central de drogas ilegales (que fluyen de la región andina, el principal productor de cocaína hacia los más grandes mercados del mundo en EU y Europa) y de armas (que fluyen desde EU hacia América del Sur).

Durante los pasados 15 años, la importancia del Caribe como conducto para la cocaína que ingresa a EU ha disminuido grandemente, debido a los mejorados esfuerzos de interdicción de EU, y a que los grupos mexicanos arrancaron el control de sus proveedores colombianos, dirigiendo en cambio el flujo a través de Centroamérica y México (que ahora suma cerca del 90% de la cocaína que ingresa en EU).

Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (Unodc, siglas en inglés) señaló en su más reciente informe mundial sobre drogas de 2010, que esa declinación sirvió para elevar la violencia aún más hasta llegar a “ la competencia a nivel de la calle por los ingresos declinantes, y que ha alimentado las crecientes tasas de homicidios” . El informe de Unodc cita el ejemplo de Jamaica donde las estimaciones para el flujo de cocaína a través de

Jamaica se redujo de 11% de la provisión de EU en 2000, a 2% en 2005, y a 1% en 2007. Sin embargo, la tasa de asesinatos se elevó de 34 por cada 100.000 habitantes en 2000, a 59 por cada 100.000 en 2008.

Exacerbando aún más el problema están otras iniciativas regionales que producen el efecto de desborde, como el Plan Mérida – el programa multi-anual para combatir el crimen organizado en México y Centroamérica.

Las bandas jamaiquinas y otras bandas caribeñas quedaron involucradas en las redes del tráfico internacional de drogas y armas.

Eso ha sido reconocido por EU, que en mayo de 2010 lanzó la iniciativa de seguridad regional conocida como Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CNSI, siglas en inglés). Ese esquema tiene los objetivos de “reducir de manera sustancial el tráfico ilícito; incrementar la protección pública y la seguridad y promover la justicia social”. Como parte de la iniciativa, EU está avanzando de un régimen de cooperación bilateral en seguridad a uno en el cual la Comunidad Caribeña (Caricom) más la República Dominicana se convierten en socios clave de EU.

La diversidad de las bandas

Desde hace tiempo, los expertos señalan la diversa naturaleza de las bandas en el Caribe. En el caso de Jamaica, por ejemplo, Anthony Harriott de la Universidad de las Indias Occidentales señala que “en un extremo del espectro están las pequeñas, mal y apenas organizados grupos de muchachos adolescentes [...] raras veces motivados por las ganancias o el poder [...] y en el otro extremo están las más grandes, bandas organizadas o “posses” [...] involucradas en actividades más organizadas del mercado negro, que desde hace tiempo han establecido lazos con políticos del país [...]” También como la antes mencionada banda “Shower Posse”, estas incluyen a Spanglas, Fatherless Crew (conformada por jóvenes sin padres) y “Lock di City”. Al igual que el informe de junio de 2010 del proyecto de investigación con base en Suiza, Small Arms Survey, señala que las bandas en Trinidad y Tobago “difieren de las bandas en otras

partes de la región. Con una o dos excepciones como Jamaat al Muslimeen [un grupo Islámico radical con supuestos lazos con el crimen organizado, más conocido por su intento de golpe en 1990], la mayoría de las bandas en Trinidad y Tobago son efímeras, más pequeñas [...] con una orientación muy local” .

Las “ posses” jamaiquinas han expandido sus operaciones en la Cuenca del Caribe, EU, Canadá y Europa, el informe de Unodc destaca el rol de los traficantes dominicanos que han “ crecido en importancia en Europa desde alrededor de 2005, y actualmente son segundos sólo ante los colombianos entre los traficantes extranjeros de cocaína arrestados en España, el punto primario de entrada.” Con relación a EU, el informe de Unodc indica que “ los grupos dominicanos han sido identificados en al menos 54 ciudades de EU [...y...] operan principalmente en sitios a lo largo de la costa este, incluido Florida.”